



15 Mayo, 2026

LA GUARDIA CIVIL SANCIONÓ 17.173 VERTIDOS SIN PERMISO EN ESPAÑA EN 2025

Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos

Los delincuentes ofrecen retirar escombros de obras de construcción y los desvían a parcelas de particulares ● Catalunya registra más de 300 vehículos abandonados en espacios naturales



15 Mayo, 2026

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Los delincuentes ofrecen retirar los escombros en las obras de construcción y, en lugar de trasladarlos a una planta de tratamiento autorizada, los desvían a parcelas de particulares suyas o de terceros.

Grupos mafiosos controlan la gestión ilegal de residuos

ROBERTO BÉCARES
 Madrid

Captaban a sus clientes en las propias obras de construcción de Málaga. Les ofrecían un servicio integral: retirar los residuos de la obra para su gestión legal, pero, en lugar de trasladarlos a una planta de tratamiento autorizada, lo desviaban a parcelas propias o de terceros con cuyos dueños habían pactado previamente. Así, durante años, consiguieron verter ilegalmente más de 167.000 toneladas de residuos de obra, entre los que había amianto, un material altamente peligroso.

Una reciente operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, bautizada como Cover, consiguió destapar las prácticas de la banda, con la investigación de 12 personas físicas y tres jurídicas. Los delincuentes utilizaban el método conocido como de «relleno y sellado», que consiste en mezclar residuos peligrosos, entre ellos escombros, amianto, aceites o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con tierras inertes.

Tras la mezcla procedían al extendido y compactado para que, a simple vista o desde el aire, pareciera una nivelación del terreno o una mejora agrícola. En este caso usaban parcelas agrícolas de la zona de la Axarquía que no estaban siendo explotadas para su uso.

Delincuentes profesionales

«Nos encontramos ante una delincuencia profesionalizada y altamente especializada. No son vertidos esporádicos de particulares, sino una red logística estructurada», señalan fuentes de la Guardia Civil sobre un delito muy frecuente en España y con graves consecuencias, ya que la falta de gestión profesional de los residuos puede generar un elevado riesgo de incendios por la acumulación de

materiales inflamables, contaminación de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros daños.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Seprona a EL PERIÓDICO, en 2025 se registraron un total de 17.173 infracciones contra la normativa sobre residuos y vertidos, a lo que hay que sumar otras 143 infracciones sobre contaminación atmosférica. Cada año suele haber una media de 20.000 denuncias por vertidos ilegales.

Aparte de la colaboración ciudadana, el factor determinante es la vigilancia de puntos críticos

los agentes del Seprona trabajan con pruebas periciales a posteriori. Una de ellas son las catas de residuos. Aunque el vertido esté enterrado, mediante excavaciones controladas se recuperan muestras que determinan la trazabilidad, la antigüedad y la peligrosidad del residuo. También se realizan, además de cruces de datos de albaranes, facturación y la tenencia o no de certificados de plantas de gestión autorizadas, análisis de lixiviados. «La contaminación del suelo y las aguas subterráneas deja una huella química imborrable que vincula el residuo con el daño ambiental», precisan desde la Guardia Civil.

Costes más elevados

Según fuentes del Seprona, la extensión del territorio y la proliferación de zonas rurales aisladas en Andalucía facilitan, al calor de la construcción, la creación de estos «puntos negros» que generan un daño ambiental valorado, en este caso concreto, en más de 6 millones de euros. El motor del delito es siempre económico. En la provincia de Málaga, por ejemplo, la gestión legal de una tonelada de residuos de construcción oscila entre los 15 y 25 euros, mientras que la de residuos peligrosos, como el amianto (fibrocemento), conlleva costes mucho más elevados por sus protocolos de seguridad.

En algunos casos, los delincuentes son empresas autorizadas que, para ahorrarse los gastos de gestión legal, realizan vertidos indiscriminados en la naturaleza, como ocurrió en Molina de Segura (Murcia) hace unos años, cuando el Seprona descubrió que se estaban vertiendo residuos a través de un gran agujero en una finca cercana a una empresa de venta de productos químicos y gestora de residuos tóxicos. Tras años con esta práctica ilegal, los residuos peligrosos habían llegado a la red de alcantarillado municipal y a las de-



Un guardia civil, en una operación contra una banda que se dedicaba a los vertidos ilegales en Málaga.

puradoras. Desde Ecologistas en Acción denuncian que este tipo de vertidos se reducirían mucho si la cadena de la gestión de los residuos «estuviera completamente controlada». «Muchos transportistas se sacan dinero porque ofrecen llevar por la mitad los residuos sin los documentos exigidos. La administración no termina de poner en marcha un sistema de trazabilidad potente», dice un portavoz.

Los investigadores también se están encontrando con muchos casos en los que España es destino final o de parada camino de África de residuos procedentes de distintos países de Europa. «Es que en Italia o Francia la gestión legal de residuos es hasta ocho veces más cara que aquí», señalan fuentes de la Guardia Civil.

El mes pasado, de hecho, España lideró la mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos, con 127.000 toneladas incautadas y 337 detenidos. Las basuras ilegales llegaban a la Península desde Italia y Francia a través de puertos y por carretera. Los investigadores han constatado que

el tráfico ilícito de residuos, en el que es habitual la falsificación documental y el fraude, se ha consolidado como un problema a nivel mundial, operando a través de circuitos ilegales paralelos.

Basura italiana

El año pasado, cayó una banda que vertía 40.000 toneladas de basura italiana al año en vertederos de Tarragona y Cuenca. La Guardia Civil detuvo a 15 personas que habrían cobrado presuntamente 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de estos residuos.

Los investigadores destacan que este tipo de delincuencia crece a un ritmo del 5%, y ya es la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.

«En Almería hemos encontrado más de 400 puntos de vertido, principalmente de plásticos procedentes de la agricultura. Hay agricultores que, como les sale



más barato no pagar la gestión de los residuos, los dejan en las ramblas, en los márgenes de las carreteras. Con los invernaderos en expansión desde los años 80 y 90, creciendo de forma increíble, se produce una cantidad de residuos enorme que no tienen salida, sobre todo desde 2016, cuando China dejó de comprar los plásticos». Un portavoz de Ecologistas en Acción define así la situación que vive la provincia andaluza con la contaminación derivada de la produc-

ción de los invernaderos, motor económico de Almería.

Los vertidos ilegales de residuos, ya sea de enseres domésticos, residuos de construcción o demolición, peligrosos sólidos como el amianto y líquidos tóxicos, entre otros, se han convertido en un quebradero de cabeza para las administraciones. Se realizan en muchos emplazamientos: desde territorios de difícil acceso hasta los alrededores de las ciudades, los cauces de los ríos e incluso centros

de reciclaje sin los permisos.

A principios de 2024, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener 195 vertederos ilegales que aún no habían sido cerrados, sellados ni restaurados desde que fueron identificados y denunciados en 2008. «España ha faltado a sus labores», decía la Comisión sobre los daños graves al medio ambiente y el riesgo para la salud humana que suponen estos vertederos. ■